

**ECUADOR**

# **Debate**

## **CONSEJO EDITORIAL**

José Sánchez-Parga, Alberto Acosta, José Laso Ribadeneira,  
Simón Espinosa, Diego Cornejo Menacho, Manuel Chiriboga,  
Fredy Rivera, Jaime Borja Torres, Marco Romero.

## **DIRECTOR**

Francisco Rhon Dávila  
Director Ejecutivo CAAP

## **EDITOR**

Fredy Rivera Vélez

## **ECUADOR DEBATE**

Es una publicación periódica del **Centro Andino de Acción Popular CAAP**, que aparece tres veces al año. La información que se publica es canalizada por los miembros del Consejo Editorial. Las opiniones y comentarios expresados en nuestras páginas son de exclusiva responsabilidad de quien los suscribe y no, necesariamente, de ECUADOR DEBATE.

## **SUSCRIPCIONES**

Valor anual, tres números:

EXTERIOR: US\$. 30

ECUADOR: S/. 110.000

EJEMPLAR SUELTO: EXTERIOR US\$. 10

EJEMPLAR SUELTO: ECUADOR S/. 40.000

## **ECUADOR DEBATE**

Apartado Aéreo 17-15-173 B, Quito - Ecuador

Fax: (593-2) 568452

e-mail: Caap1@Caap.org.ec

Redacción: Diego Martín de Utreras 733 y Selva Alegre, Quito.

Se autoriza la reproducción total y parcial de nuestra información, siempre y cuando se cite expresamente como fuente a ECUADOR DEBATE.

## **PORTADA**

Magenta Diseño Gráfico

## **DIAGRAMACION**

Sonia Navarrete

## **IMPRESION**

Albazul Offset

# ECUADOR DEBATE

# 51

Quito-Ecuador, diciembre 2000

## PRESENTACION

### COYUNTURA

**Nacional:** La crisis en el Ecuador en el contexto de las reformas financieras  
7 - 22 / Wilma Salgado

**Política:** "Pugna de intereses" y desconsolidación de la democracia / 23 - 32  
Equipo Coyuntura CAAP

**Conflictividad socio-política:** Julio - Octubre 2000 / 33 - 42

### TEMA CENTRAL

La ruptura geopolítica y epistemológica del paradigma del desarrollo / 43 - 74  
César Montúfar

Dispensar la pobreza desde la exclusión / 75 - 96

José Sánchez Parga

Cómo se construyen la pobreza y sus discursos / 97 - 122

Francoise Houtart

Francois Polet

La falacia de la solidaridad y neoliberalismo / 123 - 138

J. de Olano

### ENTREVISTA

Historia y Literatura

Entrevista realizada a Héctor Aguilar Camín por Hernán Ibarra / 139 - 142

**PUBLICACIONES RECIBIDAS / 143 - 154**

## **DEBATE AGRARIO**

Clase, género e identidad: la United Fruit Company, "Hacienda Tenguel", y la reestructuración de la industria del banano / 155 - 178

Steve Striffler

Agricultura de exportación y etnicidad en la frontera México - Estados Unidos / 179 - 206 / Carmen Martínez Novo

## **ANALISIS**

La Justicia en Tiempos de la Ira:

Linchamientos Populares Urbanos en América Latina / 207 - 226

Eduardo Castillo Claudett

Democracia, estabilización económica y arreglos normativos: Argentina ... ¿una experiencia exitosa. ? / 227 - 256

Laura C. Pautassi

## **CRITICA BIBLIOGRAFICA**

Las relaciones externas de la Comunidad Andina. Entre la globalización y el regionalismo abierto / 257 - 265

Comentarios de Angel Ma. Casas Gragea

# AGRICULTURA DE EXPORTACION Y ETNICIDAD EN LA FRONTERA MEXICO-ESTADOS UNIDOS<sup>1</sup>

Carmen Martínez Novo\*

*La interpretación del uso de los trabajadores indígenas en mercados de trabajo segmentados, características del llamado "capitalismo flexible", es visto como una vuelta a la tradición. La agricultura neo-liberal por contrato crea alguna confusión, ya que en ocasiones se culpa a los "caciques regionales" y en ocasiones a las transnacionales por la miseria de los indígenas. Sin embargo, en ambos casos se interpretan los cambios como un retorno a un pasado tradicional, ya sea el de la "región de refugio" o el del Porfiriato decimonónico.*

**L**a agricultura de exportación basada en productos agrarios no tradicionales tales como los vegetales frescos, las frutas y las flores<sup>2</sup> y la agricultura por contrato entre productores locales y empresas transnacionales, están adquiriendo una importancia creciente en países del tercer mundo que necesitan divisas desesperadamente (Striffler, este número; Thrupp, 1995; Watts, 1992). Este tipo de producción agraria ha sido promovida por organismos financieros internacionales como el Fondo Monetario Internacio-

nal, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y USAID, así como por los gobiernos locales, como parte de las políticas de ajuste estructural. El propósito de promocionar este tipo de agricultura desde el punto de vista de los organismos internacionales y de los gobiernos locales es generar divisas para el pago de la deuda externa, diversificar la economía, generar empleo, y revitalizar en general el crecimiento económico. El fomento de la agro-exportación armoniza también con la estrategia principal de las refor-

---

1 Agradezco a William Roseberry, Deborah Poole, Judith Friedlander y Carlos de la Torre por su apoyo a esta investigación y por sus comentarios a diferentes versiones de este artículo. También agradezco a Francisco Rhon Dávila y al CAAP por su apoyo institucional en la primavera del 2000. La investigación en la que se basa el artículo fue financiada por la Wenner-Gren Foundation for Anthropological Research y por la New School for Social Research.

\* Gallatin School, New York University

2 Se trata de productos que antes no se podían exportar por ser delicados y perecederos. La exportación de estos productos ha sido posible con el desarrollo de nuevas tecnologías de producción, conservación y transporte.

mas neo-liberales que es la mayor apertura de la economía al comercio y a la inversión internacional (Rosen y McFadyen, 1995). Con estos fines, los organismos internacionales han otorgado crédito para el desarrollo de este sector y los gobiernos locales han contribuido con políticas para estimular la producción y para facilitar la exportación. México es junto a Chile uno de los países pioneros en el fomento de este tipo de agricultura. El sector de vegetales frescos fue promovido en México por transnacionales norteamericanas de la alimentación como Del Monte, Campbells, Gerber y otras desde los años 60 (Thrupp, 1995).

Aunque este tipo de agricultura está generando considerables beneficios a las transnacionales y a los grandes y medianos productores locales con capital y conocimientos suficientes, tiene importantes costos sociales, económicos y medioambientales. Entre ellos destacan la explotación de los sectores más vulnerables de la fuerza de trabajo, tema que se discute en este artículo, el que se da prioridad a los productores más poderosos sobre los pequeños campesinos, los riesgos económicos que implica dedicarse a un tipo de producción destinada a mercados de lujo muy volátiles, el uso de pesticidas y otros químicos de alta toxicidad, y el abuso en general del medio ambiente (Thrupp, 1995).

En el típico contrato de agro-exportación, el productor local provee la tierra y el trabajo, mientras que el contra-

tista (a menudo una empresa transnacional) aporta semillas, fertilizantes y tecnología, participa en las decisiones de producción, y comercializa el producto. La agricultura por contrato permite mayor flexibilidad que la plantación tradicional en la que la empresa transnacional compraba la tierra y organizaba la producción directamente. Las transnacionales evitan problemas tales como las presiones nacionalistas, las regulaciones locales, las expropiaciones, y los conflictos laborales. Además, el contrato permite reducir los costos relacionados con la adquisición de la tierra (Striffler, este número, Watts 1992). Esta estrategia de producción agraria, que se asemeja al sub-contrato, se asocia con el llamado "capitalismo flexible" (Harvey, 1989; Watts, 1992).

Michael Watts (1992) discute cómo la agricultura por contrato ha transformado las relaciones sociales en una zona del oeste de África a pesar de que las compañías transnacionales aparentemente no organizan la producción. En concreto, Watts señala que la agricultura por contrato ha conducido en el caso que él estudia a la auto-explotación de la familia campesina hasta el punto de que los campesinos de Gambia se han convertido en "proletarios con propiedad." Sugiero que en el caso del noroeste de México que se discute aquí, la agricultura por contrato más que transformar aprovecha las relaciones sociales locales para beneficio tanto del capital nacional como del transnacional. En este caso se trata de

relaciones sociales que tienen su origen en el pasado colonial y post-colonial en el que la población indígena ha ocupado un papel socio-económico subordinado. Así, las compañías transnacionales se benefician de la mayor eficiencia de las élites locales para extraer plusvalía y para disciplinar a los trabajadores. Además, las transnacionales evitan la responsabilidad de condiciones laborales y de salarios que no se considerarían apropiados en sus sociedades de origen.

Por otra parte, se puede afirmar que la agricultura de exportación por contrato sí ha transformado las relaciones sociales en el área de México que estudio desde el punto de vista regional, ya que en Baja California se ha dado un proceso de concentración de la propiedad y de la producción y se ha importado un número considerable de jornaleros indígenas a una región que hasta entonces se caracterizaba por estar poblada por pequeños y medianos campesinos independientes blanco-mestizos.

Varios autores han discutido el proceso de "feminización" de la fuerza de trabajo como una práctica neo-liberal extendida en contextos tanto agrarios como industriales y de servicios (Striffler, este número; Freeman, 2000; Saffa, 1995; Thrupp, 1995; Fernández Kelly, 1983). Básicamente, esta literatura analiza cómo el capital utiliza preferentemente aquel sector de los trabajadores que es más vulnerable con el fin de reducir costos salariales y de evi-

tar conflictos y reivindicaciones laborales. En el caso de las mujeres, la construcción social de su trabajo como algo "trivial" y su educación para la docilidad han constituido factores importantes de vulnerabilidad que están siendo explotados por empresas transnacionales de ensamblaje industrial, de agro-exportación y de servicios.

Otros autores han destacado el papel que juega la etnicidad en los mercados de trabajo segmentados que caracterizan al "capitalismo flexible" (Harvey, 1989). Estos están divididos entre un sector que disfruta de empleos estables, a tiempo completo y con beneficios, otro sector que es contratado a tiempo parcial o temporalmente y sin beneficios, y el resto que son sub-contratados, auto-empleados etc. Los sectores más vulnerables de la población como las mujeres y los grupos étnicos discriminados suelen ser relegados a los puestos de trabajo menos codiciados. Partiendo de esta literatura, en este artículo se analiza el uso de ciertas formas de entender la etnicidad como un factor de vulnerabilidad utilizado por los intereses agro-exportadores.

Me centro en un contexto agrario de grandes y medianas explotaciones que producen tomates, otros vegetales y frutas para exportarlos al mercado norteamericano. Estos ranchos hortícolas contratan preferentemente jornaleros indígenas migrantes procedentes de los estados de Oaxaca y Guerrero localizados en el suroeste de México. La mayoría de los productores son

prósperos agricultores mexicanos y compañías nacionales que trabajan por contrato para compañías norteamericanas como Campbells y Del Monte. Otros exportan sus vegetales directamente a los Estados Unidos (Garduño, 1991). Parto del análisis de una protesta protagonizada por jornaleros indígenas durante el verano de 1996 en el valle de San Quintín, situado en el estado de Baja California en el noroeste de México. Este evento suscitó un amplio y apasionado debate en la prensa local y nacional sobre las condiciones de vida y de trabajo de los jornaleros indígenas que es rico en imágenes y en usos de la etnicidad. El debate se intensificó aun más por el temor generalizado de que el levantamiento indígena y campesino de Chiapas y la recientemente revitalizada guerrilla rural del estado de Guerrero se extendieran al norte de México.

Tal y como han señalado Deborah Poole (2000), Peter Wade (1998), Marisol de la Cadena (1995), y otros autores es enriquecedor estudiar cómo las identificaciones y las identidades étnicas se construyen en el marco de relaciones sociales y de economías políticas particulares que a su vez se insertan dentro de procesos históricos, políticos y económicos más amplios. Aquí me interesa explorar principalmente la forma en que ciertas ideas sobre raza y etnicidad se articulan con la economía política local. Me centraré en cómo los jornaleros migrantes son identificados por individuos e instituciones blanco-mestizos, y no tanto en cómo ellos mis-

mos entienden su identidad. Sugiero que el discurso blanco-mestizo sobre lo indígena tiende a tomar dos formas en este contexto: por una parte construye a los jornaleros migrantes como personas que deben realizar las tareas más duras y humildes por salarios más bajos y en peores condiciones debido a sus características físicas y culturales. También los representa como una "población flotante" que no tiene derecho a servicios públicos. Por otro lado se los entiende como víctimas inocentes y pasivas que necesitan ser protegidas por el estado, los políticos, y otros actores que se autodenominan sus representantes. Esta última caracterización da lugar a un uso político de la cuestión indígena. La coexistencia entre ideas racistas (la desvalorización del trabajo del jornalero indígena migrante) y paternalistas (la supuesta pasividad y necesidad de protección de los indígenas) refleja la ambivalencia de los discursos dominantes en México.

### **La economía política**

El valle de San Quintín es un área semi-desértica situada a unos 300 km. al sur de la frontera entre México y los Estados Unidos. Hasta los años setenta, la agricultura no era muy próspera en esta zona debido a las escasas precipitaciones que recibía y a la ausencia de ríos u otras reservas de agua importantes. En consecuencia, el valle estaba escasamente poblado. Desde esa fecha, San Quintín se ha convertido en un emporio de producción de hortalizas y frutas para la exportación. Este cam-

bio ha sido posible gracias a la importación de sofisticadas tecnologías de origen israelí para extraer agua del subsuelo y para aprovecharla al máximo a través de sistemas de irrigación gota a gota. Con agua, el valle se convierte en una zona excelente para la horticultura intensiva, ya que sus suelos son muy fértiles, posee un clima benigno y abundante luminosidad, y está localizado muy cerca de los Estados Unidos, lo que facilita el rápido transporte de productos delicados. Además, los productores locales han adquirido conocimientos empresariales sofisticados en experiencias previas con agricultura comercial en las vecinas zonas de Mexicali y Sinaloa.

En el valle predominaba tradicionalmente el ejido, una forma de propiedad colectiva inalienable otorgada por el estado mexicano a las comunidades agrarias tras la Revolución de 1910 (Nugent, 1994). Inicialmente, los agroexportadores rentaban tierra a las comunidades. Tras la reforma del artículo 27 de la Constitución mexicana que prácticamente acaba con el ejido, la propiedad de la tierra se ha concentrado en gran medida. Actualmente, caudales de empresas mexicanas grandes y medianas concentran la mayor parte de la producción del valle (Rhett Mariscal, 1998). Los ejidatarios y los pequeños propietarios no pueden competir en un mercado agrario que requiere capital, conocimientos, y contactos por lo que se ven forzados a alquilar o vender.

A pesar de su prosperidad, a los productores locales les gusta presentarse como personas de origen humilde que han progresado gracias a sus propios esfuerzos. Esta idea se relaciona con la mitología regional del noroeste de México que es construido como una tierra de oportunidades para individuos dinámicos y trabajadores y como un área de cultura política democrática (Alonso, 1995; Nugent, 1993). Este mito no es diferente al del oeste norteamericano, ya que se trata de la misma región natural e histórica. Un jornalero mixteco señaló que los productores utilizan ese argumento para fomentar la lealtad de sus trabajadores. Según el entrevistado, los patrones hacen saber a los jornaleros que no son más que hombres como ellos que han conocido la pobreza y que gracias a sus esfuerzos individuales han logrado prosperar (Entrevista a Zenobio Ramírez, Agosto 1997).

A menudo, los productores violan las leyes mexicanas o actúan en contra de los intereses de la mayoría. Garduño (1991) mantiene que algunos productores usan más del doble del agua que se repone naturalmente en los depósitos del subsuelo. Esto causa problemas medioambientales importantes como la posibilidad de que se agoten los depósitos o de que se contaminen con sales. También utilizan pesticidas y otros químicos de alta toxicidad que, en algunos casos, están prohibidos en los Estados Unidos. A menudo, avionetas contratadas por los productores riegan los campos con productos tóxi-



cos mientras los jornaleros están trabajando. Esto causa serios problemas de salud a los trabajadores. Los productores también han ignorado las leyes agrarias mexicanas que hasta hace poco protegían la propiedad comunitaria, así como las leyes laborales. Por ejemplo, a los trabajadores no se les paga extra cuando se requiere que trabajen el séptimo día. La actitud de las autoridades ha sido tolerante frente a estas violaciones, quizás por su deseo de facilitar el crecimiento de un sector económico que se considera estratégico. Por otro lado, instituciones del estado como el Instituto Nacional Indigenista y el Programa en Solidaridad con los Jornaleros Agrarios han organizado a los trabajadores agrícolas para que demanden sus derechos.

La mayoría de los jornaleros que trabajan en el valle son indígenas mixtecos procedentes de los estados de Oaxaca y Guerrero localizados a una distancia considerable, en el suroeste de México. Originalmente, los jornaleros indígenas fueron contratados por los productores a través de "enganchadores." Primero se les contrató en otras zonas de agricultura comercial del norte de México como Sinaloa y Sonora donde se utilizaba jornaleros indígenas migrantes desde los años cincuenta. Más tarde se les buscó directamente en sus comunidades de origen en la Mixteca Oaxaqueña y Guerrerense. Los productores proveen el transporte hasta el distante norte, por lo que los jornaleros quedan comprometidos con un productor determinado por la dura-

ción de la cosecha para no perder el pasaje de regreso. Una vez establecidas sólidamente las redes de migrantes, los jornaleros mixtecos han comenzado a acudir al valle por cuenta propia. Hoy, la mayoría de los migrantes llegan por sus propios medios, aunque un buen número siguen siendo "enganchados" en sus comunidades. Se dice en San Quintín que, en tiempos de necesidad, los productores llegan a mandar aviones a Oaxaca para traer jornaleros indígenas. El propietario de una importante empresa de agro-exportación, por su parte, aseguró haber viajado varias veces personalmente al sur para reclutar trabajadores mixtecos (La Jornada, 18 de Julio de 1996). Sean o no ciertas, estas historias subrayan la importancia del sistema de enganche para el desarrollo del negocio de la agro-exportación en el valle. La práctica del enganche prueba que los productores han buscado deliberadamente a la mano de obra indígena. Esto contrasta con la idea de que los migrantes llegan a San Quintín por su cuenta, huyendo de la pobreza de su región de origen (Velasco, 1994, Garduño, 1991). Esta última interpretación permite que se represente a los jornaleros como un problema social del que la comunidad norteña no es responsable.

El ciclo de producción del tomate requiere un gran número de trabajadores solamente durante tres o cuatro meses al año, entre mayo y agosto. Estudios de instituciones gubernamentales sostienen que la población del valle

llega a doblarse durante esos meses, ya que acuden entre treinta y cuarenta mil jornaleros para la recolección del tomate, la fresa, y otros productos hortícolas (*Programa de Desarrollo Regional de San Quintín 1990-1995*). Sin embargo, un número creciente de jornaleros se está asentando o desea asentarse en el valle. En el censo de 1990 ya se registraron catorce mil jornaleros migrantes asentados en San Quintín (Garduño, 1991). Es importante subrayar esto último ya que la representación de los trabajadores como una "población flotante" en continuo movimiento se ha usado para negarles servicios e infraestructuras (entrevista con Manuel Llamada, director de PRONSJAG, Agosto de 1996). En relación a esto un maestro mixteco señala:

*Entonces nosotros lo que debemos hacer es organizarnos, plantearle al gobierno nuestras demandas de vivienda, de servicio; porque no importa si somos migrantes porque ahí bajo el borde nos tachan como los indígenas migrantes, y sí, somos migrantes pero, más ellos no se ponen a pensar que nosotros los migrantes no estamos invadiendo, sino que somos una fuente de mano de obra barata para los grandes empresarios, para los grandes agricultores: entonces el futuro de nosotros, creo, debe ser en Baja California ir peleando un territorio ya para los migrantes, que se olviden que somos migrantes y somos ya migrantes establecidos sí (Gonzalo Montiel Aguirre, 1966, citado por Velasco, 1999).*

Los productores sin embargo han fomentado la migración temporal y periódica de la fuerza de trabajo. Como ha señalado Michael Kearney (1988), el uso de una fuerza de trabajo temporal muy barata es posible únicamente gracias a la articulación de la agricultura de subsistencia de la Mixteca Oaxaqueña con la agricultura comercial de exportación del norte de México. La agricultura de subsistencia asegura la reproducción de la fuerza de trabajo durante los períodos en que no se la necesita en el sector comercial. Por otra parte, los ahorros acumulados en la agricultura comercial contribuyen a mantener un sector de subsistencia que de otra forma no sería viable.

Los mixtecos han combinado históricamente la agricultura de subsistencia con la migración temporal a zonas de agricultura comercial (Velasco, 1995; Butterworth, 1975). Desde principios de siglo, viajaron estacionalmente a la zafra en Morelos y Veracruz. En los años cuarenta y cincuenta, muchos viajaron a Estados Unidos a trabajar como "braceros." La fragilidad de la agricultura de subsistencia en su región de origen ha convertido a los mixtecos en los indígenas migrantes por excelencia en México.

Las posibilidades de transferir poblaciones trabajadoras permiten la explotación de las diferencias étnicas y regionales por parte del capital. Debido a la historia de subordinación socio-económica de los indígenas, se espera que trabajen por salarios más bajos y

que acepten peores condiciones de vida que los mestizos. También se les construye como personas dóciles y pacientes que no dan problemas a los productores. Por otra parte, los migrantes del sur son discriminados en el norte, una región que goza de mejor nivel de vida debido a la influencia económica de los Estados Unidos y a haber sido favorecida por proyectos de irrigación y de distribución de tierras tras la Revolución.

Usando la oposición norte-sur, un productor manifestó que los oaxaqueños no debían quejarse de su situación en San Quintín, ya que "en su tierra viven cien veces peor" (*La Jornada*, 18 de Julio de 1996). El mercado de trabajo está claramente segmentado en San Quintín. Las tareas mecanizadas y de oficina son desarrolladas por mestizos norteños que trabajan en las compañías a tiempo completo y que por lo tanto disfrutan de mejores salarios y de beneficios tales como seguro médico y vacaciones pagadas. Las tareas manuales del campo son llevadas a cabo por jornaleros indígenas que no disfrutan de seguridad laboral ni de beneficios. Tal y como señala un jornalero "no vemos gente de Baja [California] en el trabajo. Ellos sólo trabajan en las oficinas. Sólo viajan en auto" (entrevista con Zenobio Ramírez, Agosto de 1997). Para las tareas de selección y de empaque del tomate se contrata temporalmente a mujeres blanco-mestizas jóvenes del vecino estado de Sinaloa a las que se ofrece mejor salario

y vivienda que a los jornaleros indígenas.

Los productores justifican la segmentación laboral usando estereotipos raciales y regionales. Sostienen que las mujeres de Sinaloa son más limpias que los jornaleros indígenas y que por lo tanto están más capacitadas para las tareas de empaque (*La Jornada*, 18 de Julio de 1996). También aseguran que las mujeres norteñas son más altas y que por lo tanto pueden alcanzar mejor los cinturones que transportan la fruta. Además, los productores mantienen que cómo los indígenas son de baja estatura, están más cerca de la tierra y pueden trabajarla mejor.

La falta de higiene y la corta estatura son estereotipos racistas muy extendidos. La suciedad y la impureza son características que se asocian universalmente a los grupos subordinados. Tal y como ha mostrado Mary Douglas (1966), los conceptos de limpieza y suciedad reflejan ideas del orden y de las jerarquías sociales. La creencia de que los grupos subordinados son impuros contribuye a su marginalización y segregación, en este caso en el mercado laboral. La estatura sirve en el norte de México para distinguir tanto a los indígenas como a los migrantes del sur, ya que la dieta norteña ha incluido históricamente una mayor proporción de proteínas por ser una zona ganadera. A las mujeres de Sinaloa que trabajan en el empaque, en contraste, se les construye como blancas,

altas y bonitas. La higiene y la estatura son características que por otra parte poseen una dimensión de clase, ya que los sectores más acomodados tienen acceso tanto a servicios higiénicos como a una dieta más equilibrada.

Hay que tener en cuenta que tanto los jornaleros indígenas como las jóvenes Sinaloenses que trabajan en el empaque son grupos de trabajadores vulnerables a los que se da preferencia en el negocio agro-exportador para reducir los costos salariales. Como señala Lori Ann Thrupp (1995, p 112, mi traducción):

*En Latinoamérica y en el Caribe la mayoría de los trabajadores en el sector agrario de exportación de productos no tradicionales son mujeres, tanto en la producción como en las labores de procesamiento. Esta tendencia hacia la feminización de la fuerza de trabajo rural es un cambio generalizado que ha acompañado a la globalización de los sistemas alimentarios. (...) Los gerentes entrevistados en un estudio en el Ecuador manifestaron que preferían a las mujeres trabajadoras porque eran más diestras cosechando, seleccionando y empackando. Los gerentes también enfatizaron que las mujeres eran más sumisas, obedientes, capaces y honestas que los hombres en ese tipo de trabajo. En muchos casos, una razón importante por la que los gerentes prefieren contratar mujeres es porque se les pagan salarios más bajos que a los hombres por trabajos equivalentes, trabajan más horas sin que se*

*les pague extra, y raramente se les promueve .*

En el valle de San Quintín, sin embargo, la etnicidad parece ser un factor de mayor vulnerabilidad que el género, ya que las mujeres de Sinaloa, aunque explotadas, disfrutaban de mejores salarios y condiciones que los trabajadores indígenas. Sin embargo, ambos factores se articulan junto con la edad si se tiene en cuenta que un gran número de jornaleros indígenas son mujeres y niños menores de 14 años. A principios de los noventa, 33% de los jornaleros que trabajaban en San Quintín eran mujeres y 35.7% niños menores de 14 años (Sánchez, 1994, p. 25). A veces se llega a asociar el trabajo infantil con la cultura indígena, lo que contribuye a esencializar un factor asociado a la marginalidad socio-económica (Millán y Rubio, 1992)

Teniendo en cuenta los salarios relativamente bajos que reciben los jornaleros y los altos precios que imperan en el valle, una forma que tienen éstos de acumular un pequeño capital con el que volver a su tierra es reduciendo su calidad de vida al máximo. La percepción de sus condiciones de vida y de trabajo como algo temporal permite que los trabajadores las sufran con mayor paciencia. Otra estrategia jornalera es poner a trabajar a todos los miembros de la familia para acumular algún capital. Paradójicamente, esta forma de organización del trabajo también es favorecida por los productores, puesto que consideran que aumenta la pro-

ductividad de los trabajadores (Sánchez, 1994). Por ejemplo, si un miembro de la familia no puede cumplir las cuotas que se le asignan por ser menor de edad o por estar enfermo, el resto de la familia trabaja extra para compensar. De esta forma las estrategias de auto-explotación de la familia campesina se transfieren intactas a la agricultura comercial. Un problema derivado de esta práctica es la importancia que toma el trabajo infantil, que dificulta que los niños jornaleros reciban educación y que tengan posibilidades de movilidad social.

La organización de los trabajadores en familias también contribuye a que la fuerza de trabajo sea más "flexible." Cuando existe una gran demanda de trabajadores, se contrata a toda la familia. Cuando se necesita menos mano de obra, las mujeres y los niños son los primeros en ser despedidos sin grandes costos sociales (Sánchez, 1994). Los jornaleros asentados viven en barrios populares de autoconstrucción que son el resultado de invasiones de tierra y de negociaciones con el gobierno. Los trabajadores "temporales" viven en campamentos provistos por los productores donde las condiciones de vida son precarias. La mayoría de las enfermedades que padecen los jornaleros son causadas por una mezcla entre malnutrición, falta de higiene, falta de protección de las condiciones me-

tereológicas, y exposición a pesticidas y otros químicos de alta toxicidad. La falta de atención médica adecuada se añade a esta situación para explicar la alta tasa de mortalidad de las familias jornaleras y especialmente de los niños. Debido a que los jornaleros son trabajadores temporales, el estado da a los productores un número determinado de pases para utilizar los servicios públicos de salud. Esto constituye otro instrumento de presión en manos de los rancheros. Un servicio que originalmente es un derecho del trabajador, se convierte en un favor que le hace el patrón.

La etnicidad de los jornaleros se utiliza para justificar sus condiciones de vida y de trabajo y para negarles derechos y servicios. Por ejemplo Michael Kearney (1990, p. 65, mi traducción) escribe:

*Preguntamos al gerente de los Pinos<sup>9</sup> sobre las condiciones de vida de los jornaleros. Respondió: "Esa es la forma en que esa gente sabe vivir. Se que a nosotros nos parece mal, pero ellos cocinan en hogueras en sus pueblos. No hay servicios sanitarios allí. Si les damos cocinas, agua, no sabrían que hacer con ellas. Si abrimos ventanas en sus chozas, las cubrirían. Ellos están acostumbrados al humo. No les molesta.*

Este argumento contrasta con la opinión de una joven que trabajó como jornalera en el valle de San Quintín cuando era niña. La entrevistada manifestó que lo que encontró más humillante de su experiencia en el valle fue la falta de servicios higiénicos y de duchas, lo que le obligaba a estar cubierta de tierra y de cenizas todo el día (entrevista realizada en febrero de 1997). Otro ejemplo se refiere a la salud. El *Programa de Desarrollo Regional de San Quintín 1990-1995* (p. 61) señala que:

*"Es importante reconocer que los migrantes mixtecos no confían en la medicina convencional y, por lo tanto, hay un rechazo a usar los servicios que las instituciones de salud les ofrecen, porque muchos de ellos prefieren usar métodos y costumbres de sus tradiciones indígenas." Sin embargo, los jornaleros se han quejado de la falta de servicios médicos en el valle, y han luchado por años para que se construya un hospital público (La Jornada, 19 de enero de 1997, Cambio, 18 de Enero de 1997). Una entrevistada manifestó que la gente pobre se curaba con infusiones de hierbas y con masajes porque no tenían acceso al sistema de salud (entrevista, febrero de 1997).*

Los jornaleros de San Quintín eran representados inicialmente por los sindicatos oficiales del Partido Revolucionario Institucional a los que todo trabajador mexicano debía afiliarse obligatoriamente. Estos sindicatos en la mayoría de los casos colaboraron con los

patrones y no los presionaron para que cumplieran las leyes laborales. Por esta razón, en 1983, un buen número de jornaleros se afilió al sindicato independiente CIOAC (Confederación Independiente de Obreros Agrarios y Campesinos) que protagonizó numerosas protestas en el valle. Los líderes de CIOAC fueron duramente reprimidos, encarcelados, torturados y hasta en algunos casos asesinados durante los años ochenta (Kearney, 1990). A finales de los ochenta, el sindicato se fragmentó en una serie de grupos, algunos de los cuales mantuvieron reivindicaciones de clase mientras que otros se agruparon en torno a cuestiones étnicas. Se dice que las divisiones internas se debieron a rivalidades entre líderes estimuladas por instituciones del gobierno que siguieron una estrategia de "dividir para gobernar" (Millán y Rubio, 1992).

Las instituciones gubernamentales que han trabajado con los jornaleros en las últimas décadas han sido el Instituto Nacional Indigenista y el Programa en Solidaridad con los Jornaleros Agrícolas. El INI tiene su origen en el indigenismo post-revolucionario de los años treinta y cuarenta. El Programa de Jornaleros tiene una historia más corta. Surge a principios de los noventa como parte del más amplio Programa Nacional de Solidaridad del presidente Carlos Salinas de Gortari (1989-1994). Este conjunto de políticas sociales básicamente trataba de aliviar el impacto de las reformas neo-liberales y del ajuste distribuyendo recursos a al-

gunos de los sectores más desfavorecidos, entre los que se contaban los jornaleros migrantes. Según varios funcionarios, estas instituciones han tendido a competir por recursos y clientes en vez de colaborar (entrevistas con funcionarios del INI y PRONSJAG, Agosto de 1997). Finalmente, las instituciones han llegado al acuerdo de que el Instituto Indigenista se ocupe de la población asentada, mientras que el Programa de Jornaleros se especializa en la población "temporal" que vive en los campamentos. El INI ha usado sus recursos para fomentar el asociacionismo en torno a reivindicaciones étnicas y culturales, mientras que Jornaleros ha favorecido identidades de clase, proyectos de infraestructura y servicios, y actividades asistencialistas. Al finalizar el gobierno de Salinas, PRONSJAG ha seguido existiendo, pero sus recursos se han reducido drásticamente ya que se trataba de un proyecto personal del presidente. A fines de los noventa, su principal objetivo era servir de mediador entre productores y jornaleros para ayudar a negociar a estos últimos mejores condiciones laborales. El INI, cuyo presupuesto también se ha reducido como parte del ajuste estructural, también se dedica a mediar en los conflictos agrarios del valle.

### Los disturbios

El tres de julio de 1996, entre 500 y 800 jornaleros, la mayoría de ellos indígenas migrantes, se agruparon para

comunicar sus quejas a la administración del rancho Santa Anita porque no les había pagado su salario por varias semanas. La policía acudió a sofocar la protesta y provocó a los trabajadores golpeando a un niño jornalero de unos diez años de edad. Los jornaleros respondieron violentamente y tres policías resultaron heridos. Seguidamente, los migrantes quemaron varios autos de la policía municipal, estatal y federal así como un camión que pertenecía a los dueños del rancho Santa Anita, el cual usaron para bloquear la única carretera que recorre la península de Baja California de norte a sur. Finalmente, ocuparon y vandalizaron las oficinas municipales y saquearon unas 25 tiendas situadas en el centro del pueblo. Después de estos hechos, que fueron descritos por la prensa local como "violencia y saqueos" o como "revuelta social" dependiendo de la mayor o menor simpatía de los medios por las reivindicaciones de los migrantes, las autoridades municipales, estatales y nacionales comenzaron a prestar mayor atención a las condiciones de vida y de trabajo del valle de San Quintín. Por ejemplo, un funcionario del Instituto Nacional Indigenista comentó que "antes de los saqueos, San Quintín era un área abandonada. Nadie había visto jamás al gobernador. A partir de los saqueos, cuando pasa algo, llega un avión directamente desde Mexicali" (entrevista con Efraín García, Agosto de 1997).

A menudo se piensa que las protestas populares espontáneas son actos de violencia irracional llevados a cabo por una masa desorganizada que desafía a la autoridad establecida y que atenta contra la vida y la propiedad. E.P. Thompson (1991) y Coronil y Skursky (1991) han cuestionado este lugar común y han sugerido que, por el contrario, las protestas populares se caracterizan por ser ordenadas y por tener objetivos muy claros. Según Thompson, las acciones de la multitud tienen significados simbólicos que apuntan a una idea de legitimidad que él llama "economía moral." En este artículo utilizo este concepto para analizar tanto las acciones concretas de los jornaleros que participaron en la protesta, como el debate que surge en torno a esta. Señalo que ambos apuntan hacia un consenso que se consolida tras la Revolución Mexicana de 1910 y algunas de cuyas características podrían incluso remontarse a la época colonial.

El concepto de economía moral de Thompson se ajusta bien al contexto mexicano de mediados de los años noventa. Los disturbios que él estudia tomaron lugar en un momento de transición del sistema estatal paternalista del antiguo régimen a lo que él llama "la nueva economía política del libre comercio." En este período de transición, la multitud apelaba a lo que entendía como los derechos tradicionales del pueblo. Durante los años ochenta y noventa, México ha pasado por una transición de un modelo estatal populista,

en el que se entendía al estado como paladín de los pobres y de los indígenas, a un sistema neo-liberal en el que se fomenta la eficiencia económica y en el que el papel del estado se ha reducido. Fernando Coronil y Julie Skurski (1991) han usado el concepto de economía moral de Thompson con resultados interesantes para discutir el llamado "Caracazo." Los autores sugieren que la población de Caracas apeló a una visión del mundo populista para legitimar los impresionantes disturbios de 1989 en contra de las reformas neo-liberales del gobierno de Carlos Andrés Pérez. Sin embargo, también es justo señalar que las contradicciones entre el discurso político populista del estado mexicano y su apoyo a los intereses del capital datan del período de institucionalización de la Revolución y no son específicos del presente momento de transición. En todo caso, la actual transición puede estar exacerbando contradicciones que tienen raíces históricas más profundas.

Como señalé anteriormente el motivo que desató la protesta fue que una empresa no había pagado a sus trabajadores por algún tiempo. La prensa descubrió después que pagar a los trabajadores entre tres semanas y un mes tarde era una práctica común en el valle (*Cambio*, 5 de Julio de 1996). En algunas noticias de prensa se señaló que los trabajadores protestaban porque tenían hambre. Esto es improbable ya que los jornaleros normalmente tienen acceso a crédito en las tiendas del pueblo o del campamento. Además, la idea



de que los indígenas sólo protestan cuando tienen hambre resta intencionalidad a sus acciones. Había otras razones tras la protesta.

Los jornaleros señalan que perciben su trabajo en San Quintín como un sacrificio temporal que les sirve para acumular algunos ahorros que invierten en su región de origen o que mandan a sus familias. No suelen protestar por las condiciones de vida, los malos tratos, el efecto de los químicos en su salud, o los largos días de trabajo. Sin embargo, no están dispuestos a hacer concesiones con respecto a su salario.

El líder mixteco Don Isaías Vázquez destacó en una entrevista dos protestas que habían tomado lugar en San Quintín en 1996. Las dos estaban relacionadas con amenazas al salario de los jornaleros. Una es la que aquí se analiza y la otra consistió en una serie de disturbios protagonizados por los jornaleros en contra de una funcionaria corrupta de la oficina de telégrafos del pueblo. Las familias jornaleras utilizaban el telégrafo para mandar sus ahorros a Oaxaca. Los jornaleros se quejaban de que sus familias no estaban recibiendo todo el dinero que habían mandado, o de que no recibían nada. También se quejaban del cambio que se les daba por el dinero que mandaban en dólares. Finalmente, la funcionaria fue despedida (*Mexicano*, 3 de diciembre de 1996; 16 de diciembre de 1996).

Algunas noticias de prensa se referían a los manifestantes como jornaleros, otras como jornaleros migrantes, y otras como indígenas migrantes. Se usaban dos discursos diferentes para caracterizar a los protagonistas de la protesta: Uno basado en la clase y otro en la etnicidad. Estos discursos reflejan las dos instituciones gubernamentales que trabajan en el valle con la misma población: el Instituto Nacional Indigenista y el Programa en Solidaridad con los Jornaleros Agrícolas. Un funcionario del INI señala "El enfoque de Jornaleros es muy limitado. Ellos sólo buscan mejoras materiales. Piden electricidad, agua, pavimento. Cuando las consiguen, se disuelve el grupo. Esto es un problema. El INI trabaja en base a la etnicidad. La etnicidad da continuidad a nuestras acciones" (entrevista con Efraín García, INI, Agosto 1997).

El director del Programa de Jornaleros por su parte afirma "Hay tantos grupos políticos en San Quintín. (...) que luchan entre ellos. No crean un frente común. La etnicidad no es predominante. Los derechos laborales deben predominar" (entrevista con Manuel Llamada, Agosto de 1997). Estos dos discursos, por su parte, reflejan dos formas en que los grupos populares se han incorporado históricamente al estado mexicano: como campesinos, trabajadores o grupos populares urbanos y como indígenas. Sin embargo la etnicidad y la clase se articulan de tal forma que se ha argumentado que en el contexto mexicano contemporáneo el término "jornalero" se usa práctica-

mente como sinónimo de "indígena" (Macip, 1997).

Quemando los autos de las autoridades federales, estatales y municipales y tomando las oficinas municipales, los manifestantes querían asegurarse de que su mensaje llegara a "los tres niveles de gobierno." En contra de lo que a menudo se asume, los grupos populares no ignoran las estructuras del estado, sino que las conocen muy bien, ya que tienen que tratar con ellas a diario. La mayoría de los indígenas con los que conversé me hablaron de sus buenas relaciones con "los tres niveles de gobierno." Esta expresión hace referencia al proceso de descentralización que está tomando lugar en México. El gobierno federal está transfiriendo poderes y recursos a los gobiernos estatales y municipales. En la época en que ocurrieron los disturbios, los niveles de gobierno se asociaban con diferentes partidos políticos en Baja California, ya que el Partido Revolucionario Institucional gobernaba a nivel federal mientras que el partido de oposición demócrata Partido de Acción Nacional gobernaba a nivel estatal y local.

Cuando los jornaleros quemaron el camión del rancho estaban obviamente confrontando a sus patrones. Sin embargo, es interesante señalar que los manifestantes se concentraron más en la destrucción de la propiedad pública que de la del rancho que los empleaba. Parecían estarse dirigiendo al estado en mayor medida que a sus patrones

en un conflicto que aparentemente concernía sólo a estos últimos. Esto indica que el estado es percibido como mediador privilegiado entre grupos sociales con intereses opuestos. Otra razón para que los trabajadores se dirigieran al estado y no a los productores es que los productores han reprimido a los jornaleros con mayor violencia que el estado. William Rhett Mariscal (1998, p. 84-85, mi traducción) señala:

*Se dice que los rancheros tienen guardias armados que usan para intimidar a los sindicalistas. Durante una huelga en un rancho en 1988, los guardaespaldas de un productor amenazaron a los líderes con sus armas. Uno de esos líderes me dijo que su organización no se metió en ninguna actividad política por más de un año debido a esta amenaza. Desde entonces, esta organización y otras organizaciones nuevas del valle se centran en demandar vivienda y servicios del estado. Ya no actúan directamente contra los rancheros.*

Guardño, García y Morán (1989, p. 215) también señalan que el sindicato independiente CIOAC no ha confrontado la tensión entre productores y jornaleros en el valle. Por el contrario, el sindicato se ha centrado en demandar tierra y crédito para construir casas y en pedir infraestructura urbana asemejándose más a un movimiento urbano popular que a un sindicato agrario.

El saqueo de las tiendas se explica por la especulación y por los precios

abusivos de los productos básicos que imperan en San Quintín debido al aislamiento del valle de los canales comerciales regulares. El saqueo también puede estar relacionado con la costumbre de los rancheros de pagar tarde los salarios. Cuando los trabajadores no cobran a tiempo, se ven forzados a comprar a crédito a precios más altos. Además, algunas de las tiendas del pueblo son propiedad de los mayordomos (Garduño, García y Morán, 1989). Por esta razón, una forma en que el estado ha reaccionado a las protestas de los trabajadores ha sido abriendo tiendas estatales en las que los productos básicos están subvencionados y los precios están controlados. Finalmente, el alcalde de San Quintín llegó al lugar de los disturbios para mediar entre productores y jornaleros. Sesenta y siete trabajadores fueron detenidos. Los dueños del rancho firmaron un documento en el que prometían pagar los salarios adeudados en los próximos días. Poco después las autoridades laborales, federales y estatales visitaron el valle para interesarse por las condiciones de vida y de trabajo de los jornaleros (*Zeta*, Julio 5-11 de 1996). Los "tres niveles de gobierno" respondieron rápidamente a los reclamos de los trabajadores. Las autoridades prometieron a los jornaleros que invertirían en infraestructura, salud y educación. También prometieron que se asegurarían de que se respetaran los derechos laborales de los trabajadores.

Sin embargo, veintiocho trabajadores fueron sentenciados por el saqueo

de las tiendas y por quemar el camión del rancho, mientras que a los productores no se les procesó por no cumplir las leyes laborales. Es interesante señalar que no se condenó a nadie por destruir propiedad pública, por herir a los policías o por participar en los disturbios. Básicamente, el estado se concentró en proteger la propiedad privada. Incluso hubo rumores en el valle de que el estado contribuyó a cubrir los daños sufridos por productores y tenderos (*Mexicano*, 12 de Julio de 1996). Quizás esto explica porqué los jornaleros prefirieron destruir la propiedad pública ya que probablemente sabían que esto traería menos consecuencias.

Los disturbios de San Quintín revelan las prácticas ambivalentes del estado mexicano. Por una parte es un estado capitalista comprometido con la reforma neo-liberal que apoya a los agro-exportadores tolerando que desobedezcan las leyes laborales, medioambientales y de la propiedad de la tierra. También les favorece con infraestructura, facilidades para la exportación, acceso al crédito etc. Sin embargo, por ser un estado populista que se origina en una revolución social, se espera que defienda a los pobres y a los vulnerables. Se debe tener en consideración que el estado mexicano ha construido su base de apoyo a través de la incorporación de los grupos populares a las organizaciones oficiales. Por esta razón, el estado responde rápidamente a las demandas de los jornaleros con promesas y concesiones. Esta actitud de nuevo favorece a los productores.

ya que contribuye a mantener la paz social sin que se lleven a cabo cambios significativos.

En el debate que se desarrolló en la prensa tras los disturbios, la mayoría de los articulistas consideran al estado responsable por lo ocurrido. Son comunes titulares como "Indígenas ya no soportan más la explotación a la que son sometidos. Autoridades los abandonan a su suerte." (*Mexicano*, 8 de Julio de 1996). Se subraya que el estado ha traicionado su misión primordial de defender a los jornaleros indígenas de los "caciques" locales. Por ejemplo, un líder del Partido Socialista señala que "es tiempo de que las autoridades de los tres niveles de gobierno "den la cara" y defiendan a los trabajadores agrícolas (...) Los trabajadores indígenas requieren apoyo para que no sean explotados y vivan en condiciones antihigiénicas" (*Mexicano*, 8 de Julio de 1996).

Un senador del partido democristiano PAN estuvo de acuerdo y culpó a la secretaría de trabajo del estado de Baja California por no haber mediado a tiempo entre productores y jornaleros (*Mexicano*, 6 de Julio de 1996). El hecho de que un político de derechas entienda al estado como mediador y como protector de los trabajadores es revelador. Aunque estas personas fueran conscientes de que el estado realmente apoyaba a los agro-exportadores, esperaban que normativamente defendiera a los jornaleros indígenas. Tam-

bién, igual que en el caso de los trabajadores indígenas que se dirigen preferentemente al estado, es posible que sea más fácil para la prensa culpar al estado que señalar a los agricultores.

Aunque los sucesos fueron violentos, la prensa no representó a los jornaleros como una amenaza. Les representó como personas pacíficas que eran víctimas de la explotación de los "caciques" locales y del abandono de las autoridades. Todos los participantes en el debate sin excepción reconocieron las deplorables condiciones de miseria y explotación en que se encuentran los indígenas migrantes en el estado de Baja California. Se culpó de la violencia a agitadores externos. Por ejemplo, las autoridades estatales de Trabajo y Previsión Social destacaron que "la movilización (...) al parecer no fue motivada por los trabajadores agrícolas a quienes se adeudaba su sueldo en el rancho Santa Anita, sino por extraños ajenos al lugar quienes asustaron a los trabajadores. La gente del campo se caracteriza por ser sencillos y comprensivos" (*Mexicano*, 6 de Julio de 1996). La directora municipal del PRI por su parte manifestó que "los disturbios del pasado miércoles en San Quintín fueron originados por la presencia de grupos desestabilizadores (...) nuestros indígenas son gente que han llevado siempre a cabo sus luchas en forma pacífica, por los medios legales a su alcance, y aunque siempre han enfrentado una situación adversa por parte de las autoridades del gobierno

estatal, (...) ellos nunca realizarían actos de violencia (Cambio, 7 de Julio de 1996).

La construcción de los jornaleros como seres pasivos e inocentes tiene varias implicaciones. Permite a las autoridades reprimir los disturbios y mantener al mismo tiempo la imagen de defensores de los vulnerables, ya que supuestamente se reprime a agitadores externos. Además, ésta representación legitima al estado como "ventrílocuo," ya que los indígenas no pueden defenderse por sí mismos. Los jornaleros parecen haber internalizado en cierta medida este discurso. Don Isaías Vázquez comenta los disturbios de la siguiente forma:

*Nosotros no apoyamos la violencia. Había una empresa de Sinaloa que no pagaba a la gente. La policía judicial maltrató a un niño. Hubo saqueos. Ninguna organización fue responsable de eso. Queríamos controlar a la gente pero no pudimos. Los "cholos" [pandilleros en México] se unieron al saqueo en bandas. Los jornaleros tenían hambre. Agarraron algunas cosas, pero los "cholos" agarraron todo lo que pudieron. La mayoría de los detenidos fueron mixtecos sin embargo. Los "cholos" fueron más listos y pudieron escapar. Algunos líderes que desean llamar la atención se han fotografiado con máscara. El apareció en Los Angeles en el canal 13. Dice que es un guerrillero del EPR [Ejército del Pueblo Revolucionario]. No hay guerrilla aquí. Hay organizaciones, pero son legales.*

Don Isaías confirma la idea de que los agitadores externos fueron responsables de la mayor parte de los disturbios. Sin embargo, a diferencia de las citas anteriores, reconoce la participación de algunos trabajadores en los saqueos. La falta de organización en una protesta de este tipo no es común en México, donde los grupos populares están muy estructurados. Quizás Isaías y otros líderes negaron su participación en los hechos por temor a represalias, o posiblemente usaron los estereotipos dominantes para evadir la responsabilidad sobre los hechos. Sin embargo, al negar la participación de las organizaciones y al confirmar la tesis de los agitadores externos, refuerzan las representaciones dominantes de los jornaleros como víctimas pasivas sin intencionalidad política que sólo se movilizan por hambre. Esta construcción contrasta con la larga historia de activismo político de los jornaleros de San Quintín que se detalla en la primera sección de este artículo.

Aunque los jornaleros indígenas fueron construidos como víctimas pasivas, el miedo a un levantamiento o al estallido de una guerrilla está muy presente en el debate. Este miedo surge en el contexto del levantamiento indígena de Chiapas y de la revitalización de la guerrilla rural del estado de Guerrero. Los defensores de los indígenas utilizaron este temor para amenazar con un levantamiento indígena si no se mejoraban las condiciones de vida y de trabajo de los jornaleros. Por ejemplo, el antropólogo Víctor Clark señaló que

"las condiciones de explotación y de marginación de los pobladores de San Quintín, originan los movimientos violentos de los campesinos indígenas y mestizos" (*Mexicano*, 5 de Julio de 1996). El Delegado de Derechos Humanos del estado de Baja California también advirtió que si las cosas no cambiaban podría estallar un conflicto más serio (*Cambio*, 7 de Julio de 1996). Sin embargo, éstos reconocieron en comunicaciones personales que era difícil que se diera un estallido guerrillero en San Quintín debido al paisaje desértico y plano en el que era imposible esconderse.

Un artículo titulado "Violencia Mixteca" (*Mexicano*, 8 de Julio de 1996) resume bien la imagen de los jornaleros indígenas como víctimas inocentes y pasivas de los productores y el miedo a que su sobre-explotación pueda dar lugar a la violencia:

*"La paciencia y el conformismo explotó por vez primera en el valle de San Quintín, donde un grupo de trabajadores del ramo agrícola (...) acuciados por el hambre, primeramente exigieron a gritos que se les pagaran los dineros devengados y al no tener respuesta, acudieron a la tremenda cometiendo desmanes y vandalismo. (...) Responsables: los agricultores porque a los trabajadores los quieren tratar como esclavos por tratarse de inditos acostumbrados a comer tortilla con chile. Los inditos mexicanos de primera, algunos hablando perfectamente el español, otros en su dialecto, tienen obli-*

*gaciones familiares y aunque no las tuvieran, deben alimentarse (...) Pero si el agricultor le hace al loco y se burla de los requerimientos del jornalero pretendiendo que le trabaje de gorra, los resultados serán como los del miércoles. Si los trabajadores que participaron en aquel zipizape, hubieran estado pagados normalmente, nunca hubieran participado en esos desaguisados, porque la gran totalidad de jornaleros se trata de gente pacífica dedicada al trabajo, sin descontar uno que otro acelerado que al amparo de las bebidas alcohólicas (...) incurra en delitos graves (Mexicano, 8 de Julio de 1996).*

A diferencia de otros, éste artículo culpa a los productores y no a las autoridades de los disturbios de San Quintín. Los trabajadores son presentados como seres inocentes, pasivos, y frugales que sólo pueden tener agencia bajo la influencia del hambre o del alcohol. El artículo refleja también una gran culpa y un miedo a que estalle la violencia social, como si la imagen de pasividad y bondad del indígena fuera más un deseo que una realidad.

Las autoridades, por su parte, desmintieron la posibilidad de que pudiera haber un levantamiento social en San Quintín. El mayor peligro, según las autoridades, era que agitadores externos se aprovecharan de la explosiva situación social del valle para lanzar una guerrilla del tipo de la de Chiapas o Guerrero. Propusieron medidas de vigilancia, así como alguna inversión social (*Mexicano*, 6 de Julio de 1996). Las

autoridades estaban especialmente interesadas en proyectar una imagen de paz social en el área de San Quintín por temor a que los disturbios afectaran la inversión en un sector estratégico desde el punto de vista económico. El vocal de la Comisión para el Desarrollo Regional de San Quintín aseguró:

*"Por lo demás todo ha vuelto a la normalidad en San Quintín; lo que pasó fue circunstancial y nadie más ha hecho eco de la situación, porque aquí no tiene cabida la violencia, la gente está acostumbrada a un ritmo de vida tranquilo, todo el mundo se dedica a trabajar en sus distintas áreas, fomentando el empleo e impulsando el progreso" (Mexicano, 11 de Julio de 1996).*

La prensa utilizó la palabra "cacique" para representar a los productores de San Quintín e hizo referencia a la imagen del hacendado que concentra el poder político y económico en una región aislada donde el estado revolucionario aun no penetra. Como prueba del poder y de la violencia de los caciques, varios artículos destacan la existencia de guardias blancas (armadas) en los ranchos. Sin embargo, esta imagen es paradójica en Baja California, que no es una región tradicional aislada sino un área dinámica cercana a los Estados Unidos que produce para la exportación con la ayuda de tecnología sofisticada. En efecto, varios articulistas destacaron el contraste entre la imagen del caciquismo regional y la modernidad que se percibe en Baja California. La representación de

los productores como caciques también contrasta con la forma en que a ellos les gusta presentarse, como personas de origen humilde que han subido gracias a sus propios esfuerzos.

Mientras que unos interpretan la situación de San Quintín como una manifestación del caciquismo tradicional, otros subrayan el papel de las compañías transnacionales que se están apropiando de la riqueza de la nación usando "hombres de paja" mexicanos. Según estos autores son las transnacionales las que cometen atropellos contra los jornaleros indígenas y las que provocan que aparezcan grupos guerrilleros como los que operan en Chiapas y Guerrero (*Mexicano*, 5 de Julio de 1996). Parece que hay dos discursos diferentes para interpretar la injusticia que se percibe en las relaciones sociales del valle de San Quintín. Uno entiende la situación en términos de tradición regional versus modernidad nacional. La misión del estado revolucionario, según esta interpretación, es redimir a los jornaleros indígenas del poder de los caciques regionales y "modernizar" las relaciones sociales en la región.

Este discurso, que tiene su origen en la Revolución de 1910, es elaborado magistralmente en la literatura indigenista de los años sesenta y setenta. Por ejemplo, el clásico *Regiones de Refugio* de Gonzalo Aguirre Beltrán (1967) y el conocido artículo "Clases, colonialismo y aculturación" de Rodolfo Stavenhagen (1970) interpretan la ex-

plotación de los campesinos indígenas por los hacendados mestizos como un vestigio del pasado colonial que irá desapareciendo con la modernización de las regiones y la penetración del estado revolucionario. Según los autores, este proceso transformará las relaciones de casta en relaciones de clase.

Otro discurso critica la transición del estado post-revolucionario al neoliberal en que a los intereses extranjeros se les permite explotar los recursos de México. Sin embargo, esta transición también se entiende en términos de "tradición," como un retorno al Porfiriato de fines del siglo XIX, un periodo caracterizado por la penetración del capital extranjero en México. Por ejemplo, el diario *La Jornada* (17 de Julio de 1996) señala:

*La situación laboral y social no dista mucho de la que persistía antes de la Revolución de 1910: jornadas extenuantes en las que participan familias completas de indígenas traídos mayoritariamente de la mixteca oaxaqueña; empleo de menores, niños de seis años o menos, en las pesadas labores de siembra y recolecta, vigilados por guardias blancas en ranchos cercados, habitando galerones sin luz, agua potable y muchas veces ni letrinas.*

Un editorial de Tonatiuh Guillén (*Cambio*, 11 de Julio de 1996) elabora estas ideas al analizar los disturbios. Guillén señala que los caciques rurales usaron ilegalmente a la policía para reprimir a los trabajadores que protesta-

ban por sus derechos legítimos. Guillén se sorprende porque estos sucesos no han ocurrido en una "región de refugio" como Chiapas, sino en la moderna Baja California, el primer estado de México en tener elecciones justas y en ser gobernado democráticamente por la oposición. Guillén también se sorprende de que los hechos tomaran lugar en un área rural caracterizada por el uso de tecnología sofisticada y por la internacionalización de su producción. La modernidad de Baja California, sin embargo, no se refleja según Guillén en su respeto por los derechos ciudadanos de los jornaleros indígenas. El autor entiende la modernidad como el progreso hacia la mayor democratización de la sociedad mexicana. Sin embargo reconoce que este progreso no está tomando lugar, lo que le lleva a cuestionar las estrategias recientes de desarrollo.

Este debate también tiene connotaciones regionales. Otro autor observa la misma paradoja entre tradición y modernidad. Sin embargo, interpreta los rasgos modernos como características propias de Baja California y del norte de México, mientras que considera que los rasgos tradicionales tales como "los sistemas laborales que implican niveles de explotación típicos de otras regiones" han sido importados. Según el autor, los conflictos sociales se han traído junto con los trabajadores indígenas del sur de México (*Cambio*, 7 de Julio de 1996). El autor se basa en la construcción dominante del norte como una frontera democrática que ofrece



oportunidades a individuos emprendedores (Alonso, 1995). Este punto de vista es característico de los regionalistas norteños, élites provincianas que se originan en el turismo y en el comercio. Estas se quejan de la reciente invasión de arrogantes "chilangos" (personas de la capital que consumen chile) de clase media y alta que llegan al norte con su capital y sus conocimientos, así como de trabajadores "chapparros" y de piel oscura que también llegan del sur.

La migración de capitales, técnicos, y trabajadores al norte en las últimas décadas se relaciona con el desarrollo de la industria maquiladora de exportación y de la agricultura comercial en la región. Los trabajadores indígenas parecen haber internalizado en cierta medida este discurso regionalista. Por ejemplo, Don Isaías Vázquez me explicó que en Baja California no hacía falta una guerrilla indígena porque "Aquí los patrones no son caciques como en el sur" (entrevista con Isaías Vázquez, Agosto 1997). Esta opinión podría haber sido influida por la forma en que a los productores de San Quintín les gusta presentarse frente a sus trabajadores.

La región es construida de dos formas en relación al binomio modernidad/tradición. En una versión, un centro, base del estado revolucionario, irradia modernidad entendida como justicia social hacia las regiones que aun viven en el pasado colonial. En la otra versión, una frontera norte moderna y democrática es invadida por un

sur tradicional y jerárquico. Probablemente, la primera versión se origina en el centro (la usan por ejemplo los funcionarios federales), mientras que la segunda se origina en la región y es difundida por las élites provincianas. Lo que ambas versiones tienen en común es que asocian la modernidad con la justicia social y la democratización, lo que contrasta con el "moderno" sistema de castas que impera en San Quintín.

Otra característica importante del debate es el uso político de la cuestión indígena. Todos los participantes están de acuerdo en que los indígenas son explotados y en que viven en condiciones infra-humanas. Seguidamente, usan este argumento para culpar a sus oponentes políticos, cualesquiera que sean, mientras que se presentan a sí mismos como los defensores legítimos de los indígenas y de los trabajadores agrarios. Debido a que el discurso dominante post-revolucionario construye a los indígenas y a los trabajadores como "el alma" de la nación, cualquiera que los representa, representa a México (Ver por ejemplo *Cambio*, 7 de Julio de 1996; *Cambio*, 12 de Julio de 1996; *Cambio*, 7 de Julio de 1996).

## Conclusión

En este artículo se muestra cómo relaciones sociales que se originan en el pasado colonial y post-colonial de México se usan en un contexto "moderno" de agro-industria de exportación de productos no tradicionales. El debate

de la prensa sobre las condiciones de vida y de trabajo de San Quintín, revela una economía moral derivada de la Revolución Mexicana que entiende la modernidad y el progreso como democratización de las relaciones sociales.

En este contexto se interpreta el uso de trabajadores indígenas en mercados de trabajo segmentados característicos del llamado "capitalismo flexible" como una vuelta a la tradición. La agricultura neo-liberal por contrato crea alguna confusión, ya que en ocasiones se culpa a los "caciques regionales" y en ocasiones a las transnacionales por la miseria de los indígenas. Sin embargo, en ambos casos se interpretan los cambios como un retorno a un pasado tradicional, ya sea el de la "región de refugio" o el del Porfiriato decimonónico.

Parte de la economía moral que se revela en la protesta y en el debate que la sigue es la concepción del estado como defensor de los vulnerables y como mediador por excelencia en los conflictos sociales. En un momento de transición, se reconoce que el estado favorece a los intereses agro-exportadores, pero se espera que se ponga del lado de los trabajadores indígenas, como si esta fuera su función normativa. Aunque la contradicción entre el populismo del estado mexicano y su defensa de los intereses del capital no se restringe al presente momento de transición, es posible que se haya acentuado.

Otra razón para que la sociedad se dirija preferentemente al estado para que medie en sus conflictos es que esta actitud, aunque quizás menos efectiva que un enfrentamiento directo entre grupos sociales, es también menos peligrosa y menos violenta. Se espera que el estado responda como un padre benefactor y tolerante y que otorgue algunas concesiones que aseguren la paz social.

Otro punto interesante en el debate es la distinta configuración que toma la región según desde donde se la imagine. Desde el centro, los funcionarios federales dibujan la región como una frontera bárbara que ha de ser civilizada por un estado central que irradia modernidad. Desde los márgenes las élites provincianas construyen la región como una sociedad democrática y dinámica que es oprimida y lastrada por un centro jerárquico plagado de problemas sociales.

La identificación del jornalero indígena combina elementos de clase y de etnicidad que llegan a hacerse indistinguibles. La etnicidad se usa para explicar rasgos relacionados con la marginalidad socio-económica como son las condiciones de vida deplorables, la falta de servicios higiénicos, la carencia de hospitales, la marginación al trabajo agrario estacional y el trabajo infantil. Tanto es así, que instituciones gubernamentales basadas en clase y en etnicidad respectivamente compiten por la misma población.

La identificación de esta población con el movimiento continuo también justifica que no se le provean los servicios e infraestructura necesarios. Tal y como ha señalado Michael Kearney (1991) para el caso de los migrantes mexicanos en Estados Unidos, se desea el trabajo, pero no se desea a la persona que lo ejecuta en su totalidad. Se trata de separar al trabajo del trabajador transfiriendo su reproducción a un área lejana. Los jornaleros migrantes, por su parte, aceptan condiciones de vida deplorables con paciencia por considerarlas temporales. Esto no es muy diferente de la actitud de otros migrantes, como por ejemplo los latinoamericanos en Estados Unidos. Estos no reparan por algún tiempo en las malas condiciones de vida, que conciben como temporales, con tal de ahorrar un capital para regresar o para enviar a casa. Finalmente, la representación de los indígenas como seres que carecen de agencia, intencionalidad y racionalidad, cuyas acciones sólo pueden estar motivadas por algún agente externo como los agitadores, el hambre, o el alcohol contrasta con la culpa y el miedo latente al estallido social.

## REFERENCIAS

### Documentos no publicados

Estado de Baja California. *Programa de desarrollo regional de San Quintín*. B.C. Baja California, 1995.

### Periódicos

*Cambio*, Tijuana, Baja California.

*La Jornada*, México D.F.

*Mexicano*, Tijuana, Baja California.

*Zeta*, Tijuana, Baja California.

### Publicaciones

Aguirre Beltrán, Gonzalo. *Regiones de refugio*. México: INI, 1967.

Alonso, Ana María. *Thread of Blood. Colonialism, Revolution and Gender on Mexico's Northern Frontier*. Tucson: University of Arizona Press, 1995.

Butterworth, Douglas. *Tilatongo: Comunidad Mixteca en transición*. México: INI, 1975.

Coronil, Fernando and Skurski, Julie. "Dismissing and Remembering the Nation: The Semantics of Political Violence in Venezuela." *Comparative Studies in Society and History*, vol. 33, n. 2, April 1991, pp. 288-337.

De la Cadena, Marisol. "Women Are More Indian: Ethnicity and Gender in a Community near Cuzco." en Brooke Larson y Olivia Harris. *Ethnicity, Markets, and Migration in the An-*

- des. Durham: Duke University Press, 1995.
- Douglas, Mary. *Purity and Danger: An Analysis of the Concepts of Pollution and Taboo*. London: Routledge, 1966.
- Fernández-Kelly, Patricia. *For We Are Sold, I and My People: Women and Industry in Mexico's Frontier*. Albany: SUNY Press, 1983.
- Fox, Jonathan. "Targeting the Poorest: The Role of the National Indigenous Institute in Mexico's Solidarity Program." in Cornelius, Wayne, Craig, Ann and Fox, Jonathan. *Transforming State-Society Relations in Mexico*. San Diego: Center for U.S.-Mexican Studies, 1994.
- Garduño, Everardo. "Mixtecos en Baja California: El caso de San Quintín." *Estudios Fronterizos*, n. 24-25 January-April/May-August, 1991, pp. 87-113.
- Garduño, Everardo, García, Efraín, Morán, Patricia. *Mixtecos en Baja California: El caso de San Quintín*. Mexicali: Universidad Autónoma de Baja California, 1989.
- Harvey, David. *The Condition of Postmodernity*. Cambridge: Blackwell, 1989.
- INI. "Panorámica general de la problemática de los jornaleros en San Quintín," Ensenada:INI, 1996.
- Kearney, Michael. "Borders and Boundaries of State and Self at the End of Empire." *Journal of Historical Sociology*, v 4, n 1, March 1991.
- , "Mixtec Political Consciousness: From Passive to Active Resistance." en Daniel Nugent. *Rural Revolt in Mexico and U.S. Intervention*. San Diego: Center for U.S.-Mexican Studies, 1988.
- Macip, Ricardo. *Politics of Identity and Internal Colonialism in the Sierra Negra of Mexico*. Master's Thesis, New School for Social Research, 1997.
- McFadyen, Deidre. "Introduction." en Rosen, Fred and McFadyen, Deidre. *Free Trade and Economic Restructuring in Latin America*. New York: Monthly Review Press, 1995.
- Millán, Saúl and Rubio, Miguel Angel. *Mixtecos en la frontera norte*. Working Paper: MEXico: INI, 1992.

- Nagengast, Carole and Kearney, Michael. "Mixtec Ethnicity: Social Identity, Political Consciousness, and Political Activism." *Latin American Research Review*, v 25, n 2, 1990, pp.61-91.
- Ortiz, Mauricio and Vélez, Jaime. "San Quintín, Baja California: El alma en la tierra." *Ojarasca*, n. 13, October, 1992, pp. 32-46.
- Ortiz, Mauricio and Vélez, Jaime. "En tránsito a San Quintín." *Ojarasca*, n. 13, October, 1992.
- Poole, Deborah. *Visión, raza y modernidad. Una economía visual del mundo andino de imágenes*. Lima: Sur Casa de Estudios del Socialismo, 2000.
- PRONASOL. *Diagnóstico de las condiciones de vida y trabajo de los jornaleros agrícolas del valle de San Quintín, B.C.* San Quintín: PRONASOL, 1991.
- Rhett-Mariscal, William L. *Settling In: New Indian Communities and the Transformation of Citizenship in Mexico*. Disertación de Ph.D. University of California, San Diego, 1998.
- Safa, Helen. *The Myth of the Male Breadwinner: Women and Industrialization in the Caribbean*. Boulder: Westview Press, 1995.
- Sánchez, Muñozhierro, Lourdes. *Jornaleros indígenas en el noroeste de México*. PRONASOL: México D.F., 1994.
- Stavenhagen, Rodolfo. "Classes, Colonialism and Acculturation." en Horowitz, Irving Louis. *Masses in Latin America*. New York: Oxford University Press, 1970.
- Striffler, Steve. "Clase, género e identidades: La United Fruit Company y Hacienda Tenguel," en *Ecuador Debate*. n. 51, 2000.
- Thompson, E.P. "The Moral Economy of the English Crowd in the Eighteenth Century." en E.P. Thompson. *Customs in Common*. New York: The New Press, 1991, pp. 185-259.
- Thrupp, Lori Ann. "Feeding the Global Supermarket" en Rosen, Fred and McFadyen, Deidre. *Free Trade and Economic Restructuring in Latin America*. New York: Monthly Review Press, 1995.
- Velasco, Laura. "Migración femenina y estrategias de sobrevivencia de la unidad doméstica: un caso de estudio de mujeres

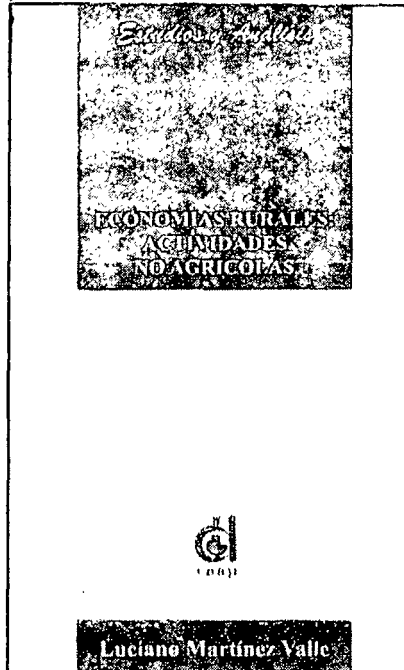
mixtecas en Tijuana." en González, Soledad, Ruiz, Olivia, Velasco, Laura and Woo, Ofelia (eds.). *Mujeres, migración y maquila en la frontera norte*. Tijuana: COLEF-COLMEX, 1995.

----- *Comunidades transnacionales y conciencia étnica: indígenas migrantes en la frontera México-Estados Unidos*. Tesis doctoral. El Colegio de México. México, 1999.

Wade, Peter. "The Cultural Politics of Blackness in Colombia." en

Norman Whitten y Arlene Torres. *Blackness in Latin America and the Caribbean*. Bloomington: Indiana University Press, 1998.

Watts, Michael. "Living Under Contract: Work, Production Politics, and the Manufacture of Discontent in a Peasant Society" in Watts, Michael y Pred, Allan. *Reworking Modernity: Capitalisms and Symbolic Discontent*. New Brunswick: Rutgers University Press, 1992.



LIBROS E IDEAS

NOVIEMBRE DICIEMBRE 2000


**NUEVA  
SOCIEDAD**
**170**  
CONTENIDO

 Director: Dietmar Dirmoser  
 Jefe de Redacción: S. Chejfec

Nº 170

NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2000

**POLÍTICA Y ESTADO:** **J. A. Rivas Leone**, Repensar la democracia. Una lectura de Norbert Lechner. **I. Lanegra Quispe**, Crisis ecológica e invención de lo político. **G. Abend**, El Estado, ese eterno *revenant*. Acerca de ciertos planteos de Peter B. Evans. **A. Dávila**, La política recuperada. **A. Stuhldreher**, De la soberanía estatal entendida como *constructo hipócrita*. **L. Madueño**, La construcción de la cultura política a través de los actores. **G. Negretto**, Repensando los poderes del Ejecutivo en América Latina. **G. Trejo**, El ciudadano y el político. ¿Por qué a veces conviene que los políticos *no* cumplan sus promesas de campaña? **A. Acosta**, Entre Weber y Marx. Capitalismo, Estado y poder social. **A. Moreiras**, Sobre las condiciones para un pensamiento izquierdista. **R. Becerra**, Paramio, la izquierda: diez años después. **A. Camou**, De cómo las ideas tienen consecuencias. **A. Garcé**, Las ideologías de los partidos políticos en el gobierno de la economía. **P. Ferreira**, El debate liberal comunitarista. La visión de Carlos Thiebaut. **C. N. Lesgart**, Transición e intelectuales en Chile. **A. Ochos**, Dos ensayos representativos del Chile actual. **Susana Rotker**, Desafíos al imaginario.

**ECONOMÍA Y DESARROLLO:** **A. Romero Gómez**, Competitividad económica y capacidad estatal. **P. Saravia**, Competitividad. Ese extraño deseo. **L. Arlovich**, Análisis sobre el Estado y los intereses económicos. **J. M. Candia**, Predicciones sobre la sociedad laboral. **Pablo Andrade A**, El desarrollo como libertad. O el reto del camino por recorrer. **C. M. Perea**, Los desafíos del nuevo orden.

**CULTURA Y SOCIEDAD:** **J. Andermann**, Pintura y nacionalidad, fotografía y nación. **X. Andrade**, Economías visuales. **F. Rapsardl**, Diferencia y nacionalidad. **R. Cicerchia**, Subversiones estructurales. **A. Grimson**, Pensar fronteras desde las fronteras. **J. Poblete**, Dos libros y un programa de investigación. **S. Makowski**, Imaginar *otra* globalización. **R. Reguillo**, De mapas rituales. Un libro transhumante. **C. E. Benzecry**, La imaginación técnica o Art como Menocchio. **J. Lesarte**, La letra onto la cultura de masas. **B. Muñoz**, Historia de la sensibilidad latinoamericana en siete capítulos y medio. **H. Legras**, Un proyecto llamado Estudios Culturales. **A. Herrero**, El origen no oficial de la Argentina. **O. Gonzales**, Entre el Perú y Hugo Neira, la tercera mitad. **I. Avelar**, Sensibilidad melancólica y alegoría crítica. **C. Ferrer**, Historia y tarareo. **E. von der Walde**, La sicareca colombiana. Narrar la violencia en América Latina. **G. Pollt**, Autobiografía, historia nacional y política. **J. M. Sánchez**, Los nuevos límites de la identidad. **D. Schugurensky**, Crónicas de la educación en América Latina. **M. Tanaka**, Ilusión, desencanto, razón, esperanza. **M. Lavario**, ¿Y si en una isla?

TEXTOS COMENTADOS.

**SUSCRIPCIONES**  
 (Incluido flete aéreo)  
 América Latina  
 Resto del mundo

**ANUAL**  
 (6 núms.)  
 US\$ 56  
 US\$ 86

**BIENAL**  
 (12 núms.)  
 US\$ 97  
 US\$ 157

**PAGOS:** Cheque en dólares a nombre de NUEVA SOCIEDAD. Rogamos no efectuar transferencias bancarias para cancelar suscripciones. Dirección: Apartado 61712- Chacao-Caracas 1060-A. Venezuela. Tels.: (58-2) 267.31.89 / 265.99.75 / 265.63.21 / 266.16.48 / 265.18.49, Fax: 267.33.97; e: [nuso@nuevasoc.org.ve](mailto:nuso@nuevasoc.org.ve); [nusoven@nuevasoc.org.ve](mailto:nusoven@nuevasoc.org.ve).  
 Página digital: [www.nuevasoc.org.ve](http://www.nuevasoc.org.ve)